

Felipe Arturo Ávila Espinosa

*Entre el Porfiriato y la Revolución*  
*El gobierno interino de Francisco León de la Barra*

México

Universidad Nacional Autónoma de México,  
Instituto de Investigaciones Históricas

2012

159 p.

(Serie Historia Moderna y Contemporánea, 44)

ISBN 10: 970-32-2779-1

ISBN 13: 978-970-32-2780-8

Formato: PDF

Publicado en línea: 31 de marzo de 2016

Disponible en:

<http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/porfiriato/revolucion.html>



INSTITUTO  
DE INVESTIGACIONES  
HISTÓRICAS

DR © 2016, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, México, Ciudad de México

## LA POLÍTICA LOCAL, RESISTENCIA Y REVOLUCIÓN

En el interinato la política estuvo en el centro de la escena nacional. La fuerza y la inercia de la insurrección provocaron una participación mayor de los sectores populares, de las clases medias y altas en la política, para definir el rumbo de la nación. Así, ocurrió una inusitada competencia política a través de la organización de multitud de clubes y agrupaciones, de corrientes de opinión y grupos que se constituyeron para participar en la coyuntura que se abrió con la sustitución de las autoridades estatales y locales. Durante el interinato, la sustitución de gobernadores, jefes políticos y presidentes municipales fue uno de los fenómenos políticos más importantes —quizá más intenso aún que en el ámbito nacional—, y ocupó la atención principal de la población y de los grupos que buscaron ocupar esos cargos y —a pesar de la interpretación que ha prevalecido en la historiografía de la revolución—, hubo un cambio y un reacomodo considerables en las relaciones de poder y en los equilibrios de las fuerzas y actores políticos que afectó a todas las regiones.

### *El cambio de gobernadores*

Los gobernadores ocupaban la cúspide del poder en el nivel estatal. Responsables de la conducción de los asuntos relevantes en las entidades, eran el fiel de la balanza para equilibrar a los grupos de poder regionales y el enlace con el gobierno federal, los centros en donde se articulaban el poder nacional y las fuerzas locales.<sup>1</sup> Madero y sus principales colaboradores, conscientes de su posición estratégica, comprendieron que para consolidar su proyecto era necesario que el maderismo ocupara esos cargos con gente suya. Así, aunque la demanda inicial con Díaz había sido la sustitución de 14 gobernadores, muy pronto exigieron que el cambio fuera total y que se sustituyera a todos los gobernadores y jefes de territorio por gente nombrada por Madero, quienes serían gobernadores provisionales y se encargarían de ejecutar y coordinar las tareas de pacificación, res-

<sup>1</sup> Guerra, *op. cit.*, I, p. 84-96.

tauración del orden, desarme de los rebeldes y organización de las elecciones.

Las instrucciones del cuartel general maderista para los cambios de gobernadores comenzaron a ser ejecutadas inmediatamente después del convenio de paz. Conocedor de la política local, Madero sabía que era una condición indispensable cambiar a los gobernadores para consolidar su victoria, para garantizar su propia seguridad personal y para que esos nuevos funcionarios le ayudaran a llevar a cabo su proyecto de conseguir la paz, democratizar las instituciones y desarrollar al país. Para lograr ese objetivo Madero fue muy enérgico e incluso amenazó con usar, o usó, la fuerza militar para conseguir los cambios que había acordado con Díaz y con León de la Barra. Así, urgió a las legislaturas locales que nombraran a Abraham González como gobernador de Chihuahua, a Venustiano Carranza en Coahuila, José María Maytorena en Sonora, José María Pino Suárez en Yucatán, José Guadalupe González en Zacatecas, Alberto Fuentes en Aguascalientes, Rafael Cepeda en San Luis Potosí, Francisco Figueroa en Guerrero, Juan Castelazo en Guanajuato, Miguel Silva en Michoacán, Benito Juárez Maza en Oaxaca, Rafael Cañete en Puebla, David Gutiérrez en Jalisco, Agustín Sánchez en Tlaxcala y Rafael Hidalgo en el Estado de México. Ante la resistencia de las legislaturas de Chihuahua y de Coahuila para nombrar a las personas propuestas, así como ante la negativa de los gobernadores de Sinaloa, Sonora y Tlaxcala para entregar el poder, Madero autorizó el avance de las tropas insurgentes sobre las capitales estatales como una medida de presión para conseguir que se hicieran esos cambios. Poco después fueron nombrados como gobernadores Leobardo Chapa en Nuevo León, Luis Alonso Patiño en Durango, Manuel Mestre Gighliazza en Tabasco, Manuel Castillo Brito en Campeche, Juan Carreón en Morelos, Espiridión Lara en Tamaulipas, Jesús Silva en Hidalgo, León Aillaud en Veracruz y Manuel Trejo en Chiapas.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> FIM a A. Figueroa, Ciudad Juárez, 24 de mayo de 1911; FIM a Manuel Bonilla, 25 de mayo, FIM a DB, 25 de mayo, 27, 28 de mayo, donde Madero protestó porque nombraron gobernador de Sonora a Avelino Espinosa, con lo que no estaba de acuerdo y había ordenado por lo tanto que avanzaran las fuerzas insurgentes sobre Hermosillo para cumplir con lo pactado, al igual que se extrañaba por el nombramiento de Felipe Ruiz en Aguascalientes, cuando había quedado en otra cosa con Limantour; FIM a Ernesto Madero, 25 de mayo, en donde le informó que marchaban fuerzas desde Monterrey contra Saltillo para demostrar que no cedería en su exigencia de nombrar a Carranza gobernador de Coahuila, y 28 de mayo, donde le pidió que fuera personalmente a Durango para investigar la "opinión de jefes revolucionarios y principales vecinos y ver quién desean de Gobernador"; FIM a Diego Redo, 28 de mayo; FIM a DB, 31 de mayo; FIM a Martín Espinosa, 1° de junio de 1911, *AFIM-BN*, ms. 1404, 1468, 1466, 682, 1619, 1713, 1697, 1721, 1893, 1937. DB a FIM, 27 de mayo, informando que gestionaba cambio de gobernadores de acuerdo a las aspiraciones populares; DB a FVG, 27 de

Para la designación de los gobernadores provisionales Madero utilizó los mismos criterios que había empleado para nombrar al gabinete. En primer lugar, escogió a maderistas civiles cercanos a él, a los que había reclutado, formado y probado en su campaña electoral y le habían demostrado su lealtad, aunque varios de ellos no hubieran participado en la insurrección. En este sentido, la insurrección sólo había sido un paréntesis y una desviación necesaria para obtener el poder. Una vez conseguido éste, Madero volvía al curso del proyecto original: el poder sería para aquellos que habían sido parte del movimiento antirreeleccionista en sus estados, que lo habían acompañado en la campaña electoral, y que deberían haber tenido un lugar en su gobierno, si no hubiera habido fraude. Había, pues, una notoria continuidad no solo en el proyecto, sino también en las personas, entre el maderismo electoral y el maderismo que comenzaba a ocupar el poder. Lo anormal, en ese contexto, había sido la insurrección.

Así, los escogidos para gobernar las regiones fueron nuevamente los políticos educados, respetables, moderados, de las elites y clases medias cercanas al maderismo. Quienes llegaron al poder en los estados eran en su mayoría profesionistas liberales de clase media, de la generación de Madero —alrededor de los 40 años— o un poco mayores. Aunque algunos provenían de familias acomodadas, como era el caso de José María Maytorena en Sonora y Venustiano Carranza en Coahuila, la mayoría eran representantes de las clases medias urbanas, que se ganaban la vida ejerciendo sus profesiones liberales. La característica principal que los distinguía había sido su participación en el antirreeleccionismo y la posición destacada que habían tenido en la organización de clubes maderistas en las postrimerías del porfiriato. Así pues, el triunfo de la revolución provocó como cambio político inmediato el arribo al poder regional de sectores de la oposición civil de una generación que había llegado a la madurez y que no había tenido espacio en el sistema político porfiriano.<sup>3</sup>

Una segunda característica de estos hombres fue que, siendo el proyecto maderista su identidad política básica, varios de ellos habían

mayo; DB a FIM, 28 de mayo; gobernador de Tamaulipas a DB, Ciudad Victoria, 29 de mayo; FIM a DB, El Paso, 31 de mayo; Miguel Ahumada, gobernador de Chihuahua a DB, 29 de mayo, donde le decía que la legislatura se opondría al nombramiento de Abraham González por la anarquía que se generaría, recomendándole esperar un tiempo prudente y retirar las fuerzas federales; *AGM*, 17/9/454, 17/9/452, 17/9/456, 2/1/23, 17/3/34, 5/A1/65/93. Lista de gobernadores, 5 de junio de 1911, *AFGG*, 19/101/1829.

<sup>3</sup> Hubo varios médicos, como Rafael Cepeda, Miguel Silva y Manuel Mestre Ghigliazza (gobernador maderista en Tabasco) y Luis Alonso y Patiño (Durango). La otra profesión dominante fue la de abogado, a la que pertenecían José María Pino Suárez, José Guadalupe González, Juan Castelazo (Puebla) y Leobardo Chapa (Nuevo León).

tenido experiencia política previa, como miembros o simpatizantes de movimientos opositores como el reyismo y el magonismo o bien en grupos locales opuestos al clan gobernante en sus regiones. No puede afirmarse, por tanto, que hubieran sido políticos improvisados en la esfera local. Un tercer rasgo que los distinguió fue que, además, Madero buscó que fueran personas con prestigio y reconocimiento en sus estados y, en la mayoría de los casos, oriundas de ahí. A diferencia del porfiriato y de la corriente constitucionalista triunfadora en la revolución, años después, Madero y León de la Barra designaron a personas que hubieran nacido y se hubieran ganado un nombre en sus estados y no permitieron la intromisión de foráneos. En los casos en que no eran originarios de las entidades que gobernaron como los coahuilenses Rafael Cepeda y Alberto Fuentes, que asumieron el poder en San Luis Potosí y Aguascalientes respectivamente, el jalisciense José Guadalupe González en Zacatecas y el tabasqueño Pino Suárez en Yucatán, fueron escogidos, además de su cercanía con Madero, porque habían establecido su residencia en esos lugares y, sobre todo, porque era ahí donde habían participado políticamente en el movimiento antirreeleccionista y habían sido los organizadores de la revuelta en esos estados. Así pues, casi todos ellos eran líderes maderistas locales y se habían ganado el derecho a encabezar el nuevo gobierno revolucionario en sus estados. Madero buscó también no romper abruptamente los equilibrios regionales y, donde el maderismo no había tenido presencia importante durante la etapa electoral ni en la insurrección, respetó a los grupos locales y sólo influyó para que sus principales enemigos no se fortalecieran, como fue el caso de Oaxaca donde bloqueó a Félix Díaz, o en Nuevo León, en donde impuso a Leobardo Chapa, opuesto al clan de Bernardo Reyes. Finalmente, otro rasgo que llama la atención es que, si bien el perfil político de la mayoría de ellos era moderado y que la naturaleza y la brevedad de su gobierno interino eran un serio impedimento para poder hacer importantes transformaciones y establecer un proyecto de más largo plazo, algunos de ellos mostraron ser partidarios de reformas sociales o tuvieron que procurar atenderlas, ante la presión social. De este modo, demandas como la supresión de las jefaturas políticas, la autonomía municipal, el descanso dominical, la jornada laboral de 8 horas, mejoras en la condición de los peones y el arbitraje estatal en los conflictos formaron parte de la agenda política de varios de los nuevos gobiernos. Aunque los conflictos políticos que se presentaron impidieron que muchas de estas reformas pudieran aplicarse y que la mayoría de éstas se llevaron a cabo cuando varios de ellos ganaron las elecciones y se convirtieron en gobernadores constitucionales, después de que Ma-

dero asumió la presidencia de la República, otro de los cambios importantes que produjo la revolución en las regiones fue el comienzo de una serie de reformas sociales demandadas por la oposición política al porfirato y por los sectores populares.<sup>4</sup>

En los gobiernos estatales, de nueva cuenta, Madero excluyó a sus jóvenes líderes militares, aunque esta exclusión fue más difícil que la del gabinete porque para las gubernaturas varios de los más destacados dirigentes populares maderistas sí tenían ambiciones y eran muy populares en sus estados, por lo cual fueron serios desafiantes y su exclusión fue uno de los factores que más desestabilizaron la política regional en esos meses. Los más osados y ambiciosos de ellos compitieron por el gobierno de sus entidades, pero fueron derrotados por la coalición del gobierno interino y el maderismo, que logró que los candidatos que contaban con el favor de Madero y que por tanto gozaron de los medios que proporcionaba el poder y que fueron en los hechos los candidatos oficiales, se impusieran. De ese modo a Pascual Orozco, el líder más prestigiado de la insurrección maderista y muy popular en Chihuahua, se le impidió legalmente competir por la gubernatura, alegando que no tenía la edad que marcaba la constitución; a Gabriel Gavira se le pusieron trabas por oponerse al candidato maderista en Veracruz, quien finalmente lo derrotó valiéndose del apoyo oficial; Juan Banderas, en Sinaloa, y Cándido Navarro, en Guanajuato, no pudieron llegar a las gubernaturas por el peso de la maquinaria maderista que, en alianza con De la Barra y los poderosos locales, favorecieron a candidatos más cómodos para ellos. La exclusión de estos dirigentes populares —junto con la de Zapata— devino meses después en rebeliones contra De la Barra o contra Madero, en movimientos con tintes de radicalismo agrario mezclado con reivindicaciones de autonomía municipal y de protesta ante la cerrazón —ahora por parte del gobierno interino y de los líderes maderistas— de los canales de participación política y de acceso al poder local para los grupos populares. Esa elección excluyente de Madero y De la Barra para los jefes militares revolucionarios fue una de las mayores fuentes de desestabilización política en los meses que siguieron y ha sido señalada

<sup>4</sup> Entre los gobernadores maderistas más comprometidos con las reformas sociales estuvieron Alberto Fuentes y Abraham González. Véanse las biografías de Rafael Cepeda, José Guadalupe González, Miguel Silva, Alberto Fuentes, José María Maytorena, Abraham González, Manuel Bonilla, Francisco Figueroa, Juan Castelazo, Antonio Hidalgo, Manuel Castillo Brito, Heliodoro Díaz Quintas, Leobardo Chapa, Luis Alonso y Patiño, Venustiano Carranza y José María Pino Suárez, en INERHM, 1982-1985, vols. I:290-291; VII:896-897; IV:252-253; I:335-336; VI:568-570; II:405-407; VI:279-280; III:418-419; VII:302-304; V:320-322; V:280-281; II:854-855; I:282-288; VI:762-763; Blanco, *op. cit.*, p. 150-154.

como otro craso error, que etapas posteriores de la revolución no cometieron.<sup>5</sup> Empero, calificarla de error es, nuevamente, un juicio *a posteriori*. En su momento, fue una decisión consciente de la coalición gobernante, correspondía a su proyecto y los candidatos escogidos representaban mejores opciones para el proyecto maderista y las elites locales que los nuevos líderes rebeldes populares. Se escogió, una vez más, al orden y la respetabilidad en lugar del radicalismo de los jóvenes rebeldes.

Así pues, la decisión principal en la elección de los nuevos gobernadores recayó en Madero, quien en regiones particularmente importantes para él y su familia, como Nuevo León, impuso a gente muy cercana y emparentada con él, como Leobardo Chapa. En los casos en los que Madero no tuvo candidato personal confió la selección en sus colaboradores cercanos que ocupaban un papel importante en la política de sus estados de origen, como en Sinaloa, donde dejó que Manuel Bonilla designara al gobernador, o en Tamaulipas, donde los hermanos Vázquez Gómez tenían influencia e intereses, quienes escogieron a Espiridión Lara como gobernador provisional. En el caso de Guanajuato, la opinión de Alfredo Robles Domínguez influyó para que Juan B. Castelazo, parte de su grupo de Silao, ocupara la gubernatura. Pino Suárez, por su parte, ejerció un dominio casi completo en la península de Yucatán, pues además de controlar esa entidad designó a su seguidor Manuel Castillo Brito en Campeche y a Manuel Mestre Ghigliazza en su natal Tabasco. En los casos en los que su selección fue cuestionada por los jefes revolucionarios locales, Madero pasó por encima de ella, como ocurrió en Oaxaca donde la junta de jefes militares se opuso a Heliodoro Díaz Quintas por considerar que no garantizaba los principios revolucionarios; Madero, quien no tenía candidato propio ni control sobre la política local en Oaxaca, no pudo impedir que esa entidad siguiera dominada por las viejas familias de los grandes caudillos oaxaqueños, Porfirio Díaz y Benito Juárez y, sin estar muy convencido, optó por el mal menor, aceptando la candidatura de Benito Juárez Maza, vinculado al reyismo años atrás, e impuso como gobernador provisional al seguidor de Juárez, Heliodoro Díaz Quintas, para impedir que continuara en el poder Félix Díaz, quien, no obstante, mantuvo su influencia como cacique regional. En Morelos la dirigencia maderista no autorizó que Zapata nombrara gobernador y, en su lugar, permitió que los hacendados morelenses, junto con los hermanos Figueroa, de Guerrero, nombraran a Juan Carreón. Al parecer, fueron pocos los estados en donde el peso de la decisión

<sup>5</sup> Knight, 1996. I, p. 311-312, 314-315.

recayó en las legislaturas y oligarquías locales, sin intervención del cuartel general maderista y, cuando así ocurrió y el maderismo no estuvo de acuerdo, esa decisión fue muy pronto revertida.<sup>6</sup>

Para la primera quincena de junio 1911 todos los gobernadores porfiristas habían sido cambiados por el maderismo que significó, en ese sentido, una renovación completa de esa estructura de poder que tenía un papel estratégico en la política nacional y local. Fue el comienzo de una verdadera revolución política que se precipitaría en cascada en los días siguientes hacia los puestos inferiores de la política y la administración local. Un destacado estudioso de la revolución mexicana ha mencionado que este proceso presentó dos patrones: en el norte, donde la revolución había tenido más fuerza, fue más rápido y drástico el cambio, y ocurrió una modificación en los equilibrios políticos y una apertura a sectores excluidos hasta entonces, mientras que en el centro y sur los cambios fueron más tardados porque la resistencia de las oligarquías regionales había sido mayor y había originado un renacimiento conservador muy temprano.<sup>7</sup> Sin embargo, en menos de un mes, el cambio fue completo en todas las entidades y es difícil encontrar un patrón en función de la fuerza o la debilidad de la revolución en las distintas regiones. Por una parte, la resistencia de las oligarquías desplazadas ocurrió en todas las entidades, no sólo en el centro-sur, e incluso en las norteñas ese cambio no significó necesariamente una mayor fuerza de la revolución que se haya reflejado en la afectación de los intereses de las clases acomodadas, puesto que una constante en la mayoría de los nuevos nombramientos fue su moderación y, en algunos, un incipiente compromiso con las reformas sociales por la vía institucional. Sin embargo, en términos generales y salvo en algunos estados, el impulso de abajo para hacer transformaciones sociales más profundas pudo ser contenido y postergado. En el norte, la mayoría de los gobernadores demostraron muy pronto su deseo de no alterar el *status quo* ni los equilibrios entre las distintas fuerzas en

<sup>6</sup> FIM a DB, Tehuacán, 24 de julio de 1911, donde le comunicó que "aunque nunca me ha parecido que Benito Juárez tenga aptitudes para gobernador del estado, desde el momento en que según parecía la mayoría del estado lo apoyaba, me pareció que no debíamos intervenir". ALDB, II:110. FIM a ARD, El Paso, 24 y 25 de mayo de 1911. Ángel Barrios a ARD, Cuicatlán, 5 y 11 de junio, en donde se oponía, en nombre de la junta revolucionaria, a Heliodoro Díaz Quintas como gobernador por no ser maderista; Urbano Espinosa a ARD, Campeche, 29 de junio; A. Martínez a ARD, Cuernavaca, 28 de mayo; M. Asúnsolo a ARD, Cuernavaca, 1 y 2 de junio. AARD, 1/5/28, 4/18/55, 4/18/57, 5/24/30, 4/19/84, 3/10/32, 4/17/40, 4/17/79, 4/17/91. INEHRM, *op. cit.*, véase p. 320-323. En el caso de Hidalgo, Madero había confirmado en el cargo a Joaquín González, pero Jesús Silva obtuvo el apoyo de Emilio Vázquez Gómez y amenazó con usar las tropas si lo querían quitar, véase J. González a DB, Pachuca, 5 de junio de 1911, AGM, 4/G1/59/83.

<sup>7</sup> Knight, 1996, I, p. 308-309.

UNAM - IHH

un grado mayor que lo que se ha sugerido y, a pesar de ello, también hubo resistencia de las elites y clases medias ante la irrupción de la violencia popular y el desplazamiento de las oligarquías regionales del poder local, lo que provocó muchos conflictos, de manera semejante a como ocurrió en el centro y sur del país. Es decir, la resistencia de las elites a cualquier transformación que afectara sus intereses fue nacional, aunque ciertamente tuvo mayor éxito en algunas regiones que en otras. Al mismo tiempo, la incipiente reforma social comenzó a activarse en donde se combinó la presión popular de abajo con el compromiso de algunos de los nuevos gobernantes que impulsaron cambios que afectaban a las oligarquías locales y provocaron el rechazo de éstas. Y, por eso mismo, los estados conflictivos fueron aquellos en los que los nuevos líderes populares maderistas trataron de abrir más espacios para los sectores de abajo y efectuar transformaciones que afectaban a las elites locales que chocaron con la resistencia de éstas y donde esa resistencia conservadora encontró apoyo de los gobernadores maderistas. Finalmente, hubo conflictos en los lugares donde, en ausencia de grupos revolucionarios fuertes, se agudizó la competencia política entre las elites regionales ante el vacío de poder.

De esta manera, hubo entidades en las que se presentó una gran inestabilidad producida por la competencia por el poder entre grupos rivales y por la incapacidad de los nuevos gobernadores para encontrar los equilibrios, por lo cual hubo muchas substituciones en los titulares del ejecutivo local: en Aguascalientes hubo 6 gobernadores durante el interinato, 4 en Puebla, 4 en Sonora, 8 en Tlaxcala y 4 en Veracruz. Las causas de esta inestabilidad fueron la lucha entre oligarquías locales para controlar el poder ante la salida de los porfiristas, como fue el caso de Sonora, la resistencia de los grandes caudillos porfiristas a ser desplazados, como Teodoro Dehesa en Veracruz, quien entrado el interinato conservaba influencia en la legislatura local y pudo incidir en el cambio de titulares del ejecutivo local o bloquear a los nuevos, así como las dificultades para contener la efervescencia popular y la movilización obrera como en Puebla y Tlaxcala, donde los gobernadores maderistas mostraron un fuerte conservadurismo.<sup>8</sup> Pero incluso en donde se logró una mayor estabilidad y en donde pudo permanecer el primer candidato nombrado por Madero, como Abraham González en Chihuahua, Pino Suárez en Yucatán, José Guadalupe González en Zacatecas, Miguel Silva en Michoacán, Rafael Cepeda en San Luis Potosí, Jesús Silva en Hidalgo, Leobardo Chapa en Nuevo León, Maytorena en Chihuahua, Mestre Ghigliazza

<sup>8</sup> INEHRM, *op. cit.*, v. I:335-336; VI:568-572; VII:363-364; VII:415, 508.

en Tabasco y Carranza en Coahuila, hubo también conflictos que pudieron sortear con éxito para ganar las elecciones y ocupar el gobierno constitucional de sus entidades. Es decir, la cercanía y el apoyo directo de Madero fueron factores que influyeron para que estos personajes del primer círculo maderista —además de su habilidad para gobernar sus regiones—, pudieran superar los desafíos que tuvieron durante su gestión. Inversamente, la desgracia de los que duraron poco tiempo en su puesto se debió a su impericia para solucionar los conflictos con los grupos de poder locales y a la falta de apoyo de Madero, del presidente interino o de los maderistas prominentes del centro.

Un problema mayor ocurrió en Chiapas, donde la salida del gobernador porfirista Ramón Rabasa y la realización de elecciones locales reavivaron un largo conflicto regional y provocaron el enfrentamiento entre las dos poderosas oligarquías estatales: la de los finqueros de San Cristóbal y la agroexportadora de Tuxtla Gutiérrez. La propuesta de Madero para gobernador provisional recayó en Flavio Guillén, sancristobalense, pero el congreso local, dominado por los de Tuxtla, nombró a Manuel Trejo. León de la Barra, a su vez, desconoció a los dos y nombró a Reinaldo Gordillo, del grupo de Tuxtla, lo que provocó una rebelión de San Cristóbal, apoyada por el obispo de esa diócesis, Francisco Orozco y Jiménez, que movilizó a un considerable pero mal armado contingente de chamulas. Los sangrientos enfrentamientos, que tuvieron rasgos de una nueva guerra de castas, provocaron la renuncia de Gordillo el 5 de julio de 1911 y su sustitución por Policarpo Rueda, neutral en la contienda, quien sin embargo no pudo acabar con la guerra y fue sustituido el 21 de agosto por Manuel Rovelo, reflejando otra vez el dominio de los tuxtlecos sobre la legislatura local. La rebelión indígena se radicalizó y se salió de control, pero la superioridad militar de los de Tuxtla los derrotó definitivamente el 4 de octubre, en un enfrentamiento en el que perecieron 100 chamulas. El gobierno federal y Madero decidieron mantener una actitud neutral y no meterse en el conflicto, hasta que se dieron cuenta —tarde—, que era necesaria la intervención del ejército, que derrotó sin mucha dificultad a las disminuidas fuerzas insurgentes en la primera quincena de octubre. Las nuevas elecciones fueron impugnadas otra vez y el congreso federal dio el triunfo al candidato de Tuxtla, Reinaldo Gordillo, quien tomó finalmente posesión el 16 de diciembre de ese año.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Henderson, *op. cit.*, p. 76-78. Manuel Pineda a DB, San Cristóbal, 28 de junio de 1911; Policarpo Rueda a DB, 4 de agosto de 1911; F. Orozco y Jiménez, arzobispo de San Cristóbal a DB, 16 de septiembre y 1° de octubre de 1911; M. Rovelo a DB, Tuxtla Gutiérrez, 10 de octubre de 1911; DB a general Paz, 11 de octubre, *AGM*, 21/7/605, 1/R3/23, 20/1/77, 21/3/256, 21/6/35, 19/5/187.

*El empuje de abajo para cambiar a las autoridades locales*

Dentro de la oleada de cambios que produjo la insurrección maderista, uno de los más importantes fue la sustitución de las autoridades locales —jefes políticos, presidentes municipales, jueces y auxiliares—, que eran los niveles más inmediatos con los que tenía contacto directo la población mayoritaria de todo el país. Precisamente por eso, por ser los agentes directos del poder y la dominación estatal, eran los eslabones más identificables y, en la mayoría de los casos, los más desacreditados e impugnados por los distintos sectores sociales. En buena medida, entre las principales motivaciones de los grupos rebeldes para lanzarse a la insurrección estuvieron los conflictos contra las autoridades locales —particularmente los jefes políticos, “el elemento más opresivo del régimen” como los denominó Guerra—, a quienes se identificaba como agentes del poder central y, al mismo tiempo, como los representantes de las oligarquías y caciques regionales. Por tanto, no fue casual que la insurrección maderista estuviera preñada de manifestaciones populares en contra de estas autoridades que, en el extremo, llegó al asesinato y persecución contra algunas de las más odiadas de ellas. Algunos autores incluso, sostienen que la revolución mexicana fue sobre todo una rebelión contra los jefes políticos. Por ello, uno de los mayores reclamos de la movilización popular en las provincias fue contra las jefaturas políticas y por el restablecimiento de las funciones y de la autonomía municipales.<sup>10</sup>

De ese modo, durante el interinato se observó en todo el país una enconada disputa por las prefecturas y presidencias municipales. A diferencia de los puestos en el gabinete y en las gubernaturas, en estas estructuras intermedias de autoridad hubo una más amplia participación de los sectores populares y una mayor influencia de ellos en la remoción y sustitución de los jefes políticos y ayuntamientos. Muchos de los nuevos funcionarios fueron elegidos por métodos de democracia directa, en asambleas y reuniones de la población, sancionadas por los jefes revolucionarios. Hubo un trastocamiento de la forma predominante de hacer política que había imperado en el porfiriato, en el que, si bien la participación popular en la política local había sido siempre mayor que en el nivel nacional, por lo general había sido un asunto reservado a las elites, oligarquías y clases medias.

<sup>10</sup> Guerra, *op. cit.*, I, p. 122-124; Blanco, *op. cit.*, p. 39-44; Falcón, 1991, p. 341; Henderson, *op. cit.*, p. 119-120.

En ese proceso de efervescencia política en las regiones, se advierte también un primer momento, en el que la actividad espontánea y autónoma de las bandas y jefes rebeldes logró la sustitución de las autoridades locales como un aspecto central de los objetivos de la insurrección y como una demostración de la nueva correlación de fuerzas. Así, en muchas de las ocupaciones de plazas y ciudades por las tropas rebeldes se hicieron también elecciones y nombramientos de las nuevas autoridades. Las razones detrás de esos cambios eran múltiples. En algunos casos, el motivo de descontento era reciente, pues los jefes políticos habían organizado el combate a la revolución en sus zonas, se negaban a reconocer a las nuevas autoridades elegidas con el aval de los rebeldes o habían reprimido a maderistas en movilizaciones y festejos, como ocurrió en Tuxtepec, en Zumpango y en Zamora, ocasionando una airada protesta popular que logró su remoción.<sup>11</sup>

Empero, en la mayoría de los casos el resentimiento de la población contra los jefes políticos era añejo y estaba relacionado con el ejercicio de poder excluyente y opresivo que percibían los habitantes en ellos. La insurrección, la actividad de los nuevos actores y la nueva relación de fuerzas permitían, por primera vez en mucho tiempo, un ajuste de cuentas y la posibilidad de hacerlos a un lado. En los archivos hay abundancia de ejemplos de todas las regiones en que se manifiesta la animadversión que despertaban los prefectos y la unanimidad de las poblaciones para quitarlos, como ocurrió en Huixtla, en el Soconusco, Chiapas, donde el líder rebelde reunió a la población y le preguntó si estaba de acuerdo con las viejas autoridades y, ante la respuesta negativa, se procedió en el acto a nombrar unas nuevas. En Tuxpan, en Orizaba, en Córdoba, en Jaltipan y en Zongolica, Veracruz, donde operaban Gabriel Gavira y Rafael Tapia, la población se movilizó exigiendo su cambio. En Jalacingo, Puebla, la población, de manera directa, eligió a nuevas autoridades y apresaron a las anteriores. En Tepic, Martín Espinosa depuso al jefe político, al jefe de armas y a las demás autoridades locales y nombró a las nuevas, decretando el cierre de cantinas y la disminución de los impuestos a la mitad. En Quintana Roo el jefe político había impuesto su cacicazgo y sembrado el terror en la población, lo que originó que ésta exigiera su remoción. En Chiautla —Puebla— y Jonacatepec —Morelos—, la población pidió que se castigaran los desmanes cometidos por los jefes políticos, que incluían asesinatos y malos tratos,

<sup>11</sup> Aureliano Tenorio a ARD, Tuxtepec, 5 de junio de 1911; ARD a EVG, 5 de junio; J. O'Farril a ARD, Pachuca, 9 de junio; I. Contreras a ARD, Zamora, 29 de mayo; ARD a Miguel Silva, 20 y 29 de mayo, *AARD*, 2/7/54, 4/15/102, 4/15/110, 4/13/47, 4/16/44/ 4/16/46.

por lo que los jefes zapatistas decidieron ejecutarlos. En Hueyapoxtla, Estado de México, los vecinos solicitaron el cambio de las “aborrecidas” autoridades municipales.<sup>12</sup> Este proceso de sustitución de autoridades locales estuvo alentado por algunos de los jefes maderistas radicales, quienes conscientemente lo promovieron, haciéndose eco de las demandas populares y como un medio tanto de legitimación de su liderazgo como de reforzamiento de su poder regional.

Aunque hubo excepciones notables de jefes políticos que apoyaron a la revolución y destacaron en ella, como Jesús Carranza, hermano de quien luego sería el primer jefe del constitucionalismo, Ignacio Bonillas que se incorporó también a las huestes de éste y sería su delphin para sucederlo en la presidencia de la República en 1920, Trinidad Alamillo, gobernador de Colima con Madero, Aureliano Castañeda, gobernador de Zacatecas en 1924, Ismael Velasco, gobernador de Morelos en ese mismo año, Ismael Padilla, gobernador interino de Sonora con Madero, y Salvador Escalante, jefe maderista en Michoacán, la gran mayoría de los prefectos políticos fueron identificados por la gente común como agentes del régimen porfirista y hechos a un lado de la política regional en un lapso relativamente breve.<sup>13</sup>

El maderismo trató muy pronto de tener el control de ese proceso. Alfredo Robles Domínguez y los nuevos gobernadores maderistas intervinieron para conducir de manera ordenada la renovación de autoridades locales desde los primeros días del interinato. Poco después, desde el gobierno interino, intentaron reforzar la sustitución de las viejas autoridades por otras identificadas con la revolución. Así, el 16 de junio de 1911, la secretaría de Gobernación emitió una circular a todos los gobernadores en la cual establecía la necesidad imperiosa de renovar las autoridades locales. Los gobiernos estatales debían “susti-

<sup>12</sup> Acta levantada en Soconusco por el secretario del ayuntamiento, 5 de junio de 1911; Guadalupe Ochoa a ARD, Tuxpan, 31 de mayo de 1911; C. Aguilar a ARD, Córdoba, 6 de junio. AARD, 3/10/27, 5/25/159, 5/25/207. Laureano Estevan a DB, Huixtla, 4 de julio de 1911; Guadalupe Ochoa a DB, Jaltipan, 31 de mayo de 1911; J. María Jiménez a DB, Zongolica, 19 de junio; Francisco Manzano a DB, Orizaba, 4 de junio de 1911; Alberto Ruiz a DB, Tepic, 26 de mayo de 1911; Vecinos de Santiago Izcuintla, Tepic, a DB, 16 de junio de 1911; Federico Campos a DB, Santa Cruz, Quintana Roo, 9 de junio de 1911; vecinos de Hueyapoxtla a DB, 16 de junio de 1911; AGM, 16/4/72, 17/6/76, 6/J1/9/11, 19/3/94, 1/1R15, 6/V1/82, 2/4/10/18, 9/S1/78. Entrevista con Amador Acevedo, *op. cit.*, p. 154 y 157, quien recordó que para el fusilamiento de Andonegui, jefe político de Chiautla “...el pueblo pedía que se le castigara... Emiliano [Zapata] nos mandó llamar a todos los jefes y acordamos que se debería poner un ejemplo con él para que otros no siguieran su camino y tuvieran temor.”

<sup>13</sup> Aunque sean ejemplos raros en las fuentes, también ocurrieron casos en los que la población prefirió a los viejos prefectos y se opuso a que los quitaran, como ocurrió en Jalpan, Querétaro, y en Otumba, Estado de México, véase Estanislao Mayorga a DB, Jalpan, 23 de junio de 1911; Javier Torres a DB, Ometusco, 24 de junio. AGM, 7/M2/3/11, 5/T1/50.

tuir elementos antiguos y viciados que no se hallen en perfecto acuerdo con las necesidades locales” o que tuvieran mucho tiempo en sus puestos “por elementos nuevos, honrados y sanos” que no estuvieran ligados con la anterior administración. Para tales cambios se requería consultar a la opinión pública, en los casos en los que no fuera necesario recurrir al sufragio popular. Por sugerencia de León de la Barra y aceptando la carencia de cuadros nuevos, suficientes y capacitados para las tareas de la administración pública, Vázquez Gómez reconocía que no era necesario sustituir al personal administrativo y judicial, salvo en los casos extremos en que fueran evidentemente rechazados por la opinión pública. A algunos gobernadores les recomendó quitar a jefes políticos especialmente mal vistos, como el de San Miguel de Allende, y les pidió que atendieran y satisficieran con prudencia el descontento popular. Aunque algunos gobernadores hicieron caso inmediato de la instrucción, como el de Guanajuato, la tardanza y las dificultades que se presentaron, hicieron que Vázquez Gómez enviara otra circular a los gobernadores el 6 de julio de ese año, en la que reiteraba la urgencia de remover las malas autoridades sustituyéndolas por quienes contaran con el respaldo popular y estuvieran “dispuestas a secundar la política progresista del gobierno federal”.<sup>14</sup>

Sin embargo, en algunas entidades la fuerza de las viejas oligarquías y la identificación de los nuevos gobernadores con ellas frustró los deseos de cambio de los líderes maderistas e impusieron a prefectos y presidentes municipales conservadores, pasando por encima del gobierno federal. Rafael Cañete, en Puebla, sustituyó a todos los jefes políticos por personal de su confianza, a pesar de la oposición del principal líder rebelde local, Camerino Mendoza, quien había nombrado previamente a otros y se opuso a que tomaran posesión los funcionarios nombrados por Cañete. Esto dio origen a una dualidad de estructuras sostenida por el gobierno estatal y por los líderes rebeldes que tuvo que ser resuelta. Cañete obtuvo facultades extraordinarias del congreso poblano y sustituyó a los jefes políticos que habían puesto los rebeldes en las semanas previas, sustituyendo incluso a los que habían sido electos mediante sufragio popular y nombró a personas adictas a él, quienes en varios casos habían servido al régimen porfirista. Esta actitud provocó violentos enfrentamientos y aunque las protestas lograron la remoción de algunos presidentes municipales, se impuso la

<sup>14</sup> EVG a DB, 16 de junio de 1911, EVG a Juan Castelazo, gobernador de Guanajuato, 19 de junio; EVG a Gobernador del Estado de México, 30 de junio; EVG a Celso Vega, jefe político de Baja California, 30 de junio; EVG a Leobardo Chapa, gobernador de Nuevo León, 4 de julio de 1911; EVG a gobernador del Estado de México, 6 de julio, *AGM*, 22/1/17, 21/7/550, 10/4/90, 10/40/91, 10/4/304, 10/4/431.

estrategia conservadora del gobernador, lo que le restó legitimidad a su gestión y dejó latentes muchos conflictos.<sup>15</sup>

En Jalisco la insurrección maderista había tenido poca fuerza, por lo que los partidarios del orden, muchos de ellos antiguos reyistas, aprovecharon la coyuntura para tener un papel relevante en la política estatal y ocuparon los cargos políticos más importantes en los primeros días del interinato. Roque Estrada, uno de los civiles más cercanos a Madero, quien tenía influencia en sectores medios y clubes políticos de la entidad, no se resignó a ser excluido y movilizó a sus partidarios en contra del gobernador David Gutiérrez Allende. Aunque Madero le pidió que apoyara al gobernador, Estrada promovió movilizaciones que lograron la renuncia de la legislatura y del ayuntamiento, ocupados por personas que habían servido al régimen porfiriano. Sin embargo, las fuerzas maderistas no lograron consolidar tales triunfos, pues Estrada fue excluido de la gubernatura; De la Barra, con la aprobación de Madero impuso como gobernador al conservador Alberto Robles Gil y en la mayoría de los distritos y municipios el poder lo ocuparon antiguos reyistas y personajes de las elites agrarias vinculadas al recién creado Partido Católico Nacional, que tuvo en Jalisco uno de sus principales bastiones. En varios municipios, la participación abierta del clero para impulsar las candidaturas de candidatos afines a la iglesia consiguió que éstos ganaran, como en Ciudad Guzmán y Tlaquepaque. Ante el fortalecimiento conservador, la desesperación llevó a que los jefes rurales maderistas Cleofas Mota, Bruno Moreno y Benjamín Camacho se levantaran en armas contra las autoridades estatales a fines de julio de 1911, pero en pocos días la rebelión fue completamente aplastada y sus líderes encarcelados.<sup>16</sup>

En algunos estados la elección de las nuevas autoridades respondió directamente a la correlación de fuerzas entre los distintos actores, como en Guanajuato, donde empresarios agrícolas, rancheros, comerciantes, mineros, campesinos y burócratas, recurrieron a la movilización para llevar al triunfo a sus candidatos. En León, la movilización popular encabezada por los políticos maderistas logró la renuncia del prefecto impuesto por la Cámara Agrícola. En Celaya, fue unánime la elección de un candidato popular, al igual que en los distritos de la Sierra Gorda, donde el gobernador envió a un representante suyo para que convocara a asambleas populares en las que se eligió de manera directa

<sup>15</sup> La France. *op. cit.*, p. 107-113 ; Rafael Izunza a secretario de Guerra, 30 de mayo, donde le informó que vecinos de Cuetzalan se declararon en favor de la revolución y depusieron a los miembros del ayuntamiento, nombrando al maderista José Flores. *AHDN*, XI/481.5/217, f. 265-268.

<sup>16</sup> O'Dogherty, *op. cit.*, p. 117-145.

a las autoridades, elección que ocurrió sin contratiempos en San José Iturbide, Santa Catarina y en el mineral de Xichú. Empero, en la misma zona, en Ciudad Porfirio Díaz ocurrieron violentos enfrentamientos entre los comerciantes y los dueños de las minas, que defendían sus propios candidatos y movilizaron a sectores populares detrás de ellos. Finalmente, se impusieron los comerciantes, quienes consolidaron su posición en la región.<sup>17</sup>

### *Las elecciones locales*

El cambio en las autoridades estatales, distritales y municipales que tuvo lugar en el interinato significó un reacomodo en los equilibrios entre las diversas elites y los grupos populares a nivel regional, equilibrio que dependió tanto de la fuerza de cada uno de ellos, como de las alianzas y apoyos que tuvieran con el exterior, con el centro, y con los principales agrupamientos nacionales que se estaban definiendo en esos días. Los nuevos gobernadores, aunque contaban con la legitimidad de haber sido puestos como resultado directo de la revolución, tenían, por lo mismo, el carácter de ser autoridades provisionales, en una situación de excepción que tenía que normalizarse en la medida en que se restableciera el orden, la estabilidad y el funcionamiento de las instituciones. Era necesario, por tanto, elegir autoridades definitivas, de acuerdo con los lineamientos constitucionales en cada caso. Entre las principales responsabilidades de las autoridades provisionales estaba la organización de ese proceso electoral, en el menor plazo posible, conjuntamente con las legislaturas de los estados, las cuales no habían sido renovadas.

El principio de la no reelección se había incorporado ya como un componente fundamental de la cultura política nacional. Madero y León de la Barra reafirmaron su compromiso con ese principio —que debía ser respetado por todos los gobernadores provisionales que quisieran ser candidatos para las gubernaturas constitucionales y, por tanto, debían renunciar a su encomienda antes de las elecciones— y agregaron otros dos elementos importantes: garantizar que el proceso pudiera darse en condiciones de completa libertad, equidad, limpieza e imparcialidad y, al mismo tiempo, respetando la soberanía de los estados y la autonomía de las fuerzas políticas y los candidatos que competieran. Esos tres lineamientos formaban parte del consenso que se había alcanzado en el país y eran reflejo del cambio que la revolución

<sup>17</sup> Blanco, *op. cit.*, p. 47-54.

había producido en la concepción y en las prácticas políticas de la época. A pesar de las dificultades que se presentaron, el compromiso del presidente interino y el del líder de la revolución con esos principios fue notable.<sup>18</sup>

Sin embargo, en la práctica se presentaron muchos problemas. Los gobernadores provisionales, a pesar de los exhortos de Madero y De la Barra para que permanecieran neutrales y garantizaran la libertad política, utilizaron el poder para buscar su permanencia en el cargo. En los hechos, actuaron desde el poder para organizar desde ahí las elecciones —como candidatos oficiales— de manera favorable a sus intereses. Algunos de ellos, de los más cercanos a Madero, como Abraham González en Chihuahua, Venustiano Carranza en Coahuila, Pino Suárez en Yucatán, Rafael Cepeda en San Luis Potosí, Guadalupe González en Zacatecas, Miguel Silva en Michoacán, lanzaron su candidatura para el gobierno constitucional y permanecieron en el cargo hasta pocos días antes de la elección, con lo que pudieron influir notoriamente en los resultados. Otro recurso del que se valieron fue el de interpretar de manera laxa o rigorista —según les conviniera más— la legislación estatal para dejar fuera a sus principales contrincantes o para permitir el triunfo de sus candidatos. En Chihuahua, se impidió que Pascual Orozco compitiera para el cargo, pues tenía 29 años y la legislación establecía como edad mínima 30. En San Luis Potosí, Rafael Cepeda, en alianza con los dirigentes maderistas nacionales, logró dejar fuera de la contienda a Pedro Antonio de los Santos —otro destacado líder maderista en la entidad, miembro de las clases altas, y quien era un serio desafío para sus aspiraciones— y ganó la elección sin problemas, al argumentar que su contrincante no cumplía con el requisito de 5 años de residencia en la entidad, requisito que él tampoco llenaba y que no fue impedimento para su triunfo.<sup>19</sup>

Otro instrumento del que se valieron fue el de fijar la fecha de las elecciones de manera conveniente para favorecer su triunfo, posponiéndola en los casos en los que así desgastaban la fuerza de sus adversarios, como ocurrió en Aguascalientes, donde Alberto Fuentes alegó que no había condiciones para garantizar elecciones en paz y quiso imponer la ley marcial, por lo que Madero le recriminó duramente su proselitismo y parcialidad. En Jalisco, los recursos empleados por el gobernador y los líderes maderistas —que incluyeron posponer la elección—, no impidieron el amplio triunfo de José López Portillo y Rojas, un candidato exreyista, apoyado por el partido católico y con mucha

<sup>18</sup> Henderson, *op. cit.*, p. 109, 113, 115.

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 115-117.

fuerza en la entidad. En Yucatán, donde Pino Suárez temía la fuerza de sus opositores, la legislatura pospuso la elección “prudentemente” aguardando tiempos más seguros. Igual hizo Lagos Cházaro en Veracruz: a mediados de septiembre todavía no convocaba a elecciones, a pesar de la protesta de diversos grupos. Este recurso de alargar los comicios también quiso ser utilizado por Madero, quien no se sentía cómodo con los candidatos en Oaxaca, donde competían Félix Díaz —quien era visto por Madero como un candidato inaceptable al que había que cerrarle el paso—, y el antiguo exreyista Benito Juárez —a quien Madero consideraba incompetente—; Madero buscó ganar tiempo, pero De la Barra y el gobernador interino oaxaqueño no aceptaron posponer la elección y Madero mismo se dio cuenta de que se originaría un grave conflicto. Cuando, por el contrario, eran los grupos opositores a Madero los que buscaban posponer las elecciones, el líder de la revolución y los gobernadores afectados lograron impedir esos propósitos y celebrar las elecciones en las fechas convenidas previamente por la legislatura, como ocurrió en Sonora y en Colima.<sup>20</sup>

Además de los recursos legales, que podían ser usados discrecionalmente, hubo también tácticas extralegales, como intimidación, presiones y represión en contra de los contendientes opositores a los candidatos oficiales maderistas. En Michoacán, donde se constituyó una fuerza católica que confluyó en el Partido Católico Nacional, surgió un candidato con fuerza, Francisco Elguero, cuya candidatura fue hostigada por los partidarios de Miguel Silva, quienes atacaron los actos de sus seguidores, lo que obligó a la policía a intervenir; el gobierno de la entidad mandó arrestar a Elguero, quien abandonó la contienda. En Veracruz, Francisco Lagos Cházaro empleó los recursos estatales para derrotar a Gabriel Gavira, quien contaba con amplio respaldo entre los sectores campesinos y obreros de la entidad y quien, una vez consumado el triunfo de Lagos Cházaro, impugnó el resultado, sin éxito, por lo cual se rebeló y fue apresado. En Yucatán, los opositores a Pino Suárez denunciaron que las autoridades estatales puestas por él mismo hacían campaña descarada a su candidatura y que henequeneros organizados por familiares de Pino Suárez trataron de impedir con machetes actos políticos de los opositores. En

<sup>20</sup> FIM a Alberto Fuentes, 18 de octubre de 1911, donde lo desautorizó para posponer las elecciones y le recriminó que encabezara mítines y manifestaciones, ordenándole que fuera estrictamente imparcial, véase AFIM, ms. 901. Club Independiente de Aguascalientes a DB, 20 de junio de 1911; Benito Juárez a DB, 2 de julio de 1911; diputados yucatecos a DB, Mérida, 13 de julio; H. Díaz Quintas a DB, Oaxaca, 27 de julio; FIM a DB, San Lorenzo, 29 de julio; T. Quintero a DB, Colima, 28 de julio; AGM, 1/1R/122/218-21; 6/J2/3/4; 3/4/50/100; 18/1/52; 5/T3/12; Henderson, *op. cit.*, p. 122-124.

Colima, el gobernador interino trabajó para que ganara la elección el hombre fuerte del maderismo en el estado, Trinidad Alamillo y hostigó a los partidarios del candidato opositor, Torres Quintero, incluso después de la elección, a pesar de la intervención de León de la Barra para que no lo hiciera.<sup>21</sup>

En general, los candidatos oficiales maderistas pudieron sortear los obstáculos y alcanzar las gubernaturas constitucionales de sus entidades. Con esto ocurrió una renovación completa de esas figuras clave del sistema político nacional. En esta renovación comenzó a perfilarse una diferencia entre Madero y De la Barra en relación con las personas que asumieron los gobiernos en los estados. Si bien en términos generales quienes alcanzaron los cargos correspondían al perfil de moderación, confianza y respetabilidad, y en la selección de varios de ellos Madero y De la Barra se habían puesto de acuerdo, en otros casos se presentaron discrepancias en relación con los candidatos mismos, así como en la interpretación de la ley y de los mecanismos y plazos electorales. Otro personaje que también fue un factor importante y que trató de influir en la selección de algunos candidatos fue Emilio Vázquez Gómez, cuyas intenciones chocaron con Madero, con León de la Barra y con fuerzas políticas locales.<sup>22</sup> La actitud del presidente interino fue respetuosa de la legalidad y de la soberanía de los estados y se mantuvo relativamente al margen de los comicios, interviniendo sólo en los casos en que era consultado, cuando el proceso se complicaba y obligaba a la intervención del gobierno o promoviendo con cautela sus preferencias. Madero, quien sabía que con toda probabilidad gobernaría al país junto con los nuevos gobernadores, se inmiscuyó mucho más en el proceso e intervino abiertamente, promoviendo a sus candidatos y oponiéndose a los que consideraba enemigos. Tuvo en ello bastante éxito.

Solamente hubo dos casos en los que no pudo llevar al triunfo a sus candidatos: Jalisco, que ganaron ampliamente los católicos y exre- yistas con José López Portillo y Rojas, y Tlaxcala, en donde Antonio

<sup>21</sup> Vicente García a DB, Morelia, 13 de junio y 28 de julio de 1911; G. González a DB, Morelia, 15 de septiembre de 1911; Alfonso Cámara a DB, Mérida, 10 de julio de 1911; P. Pérez a DB, Motul, 13 de julio; Torres Quintero a DB, México, 1 y 2 de septiembre de 1911; AGM, 4/G1/84/119; 4/G3/52/99; 4/G4/100/172; 16/4/130; 6/V1/205; 16/3/36; 5/T4/2; 12/IX/37. Henderson, *op. cit.*, p. 122.

<sup>22</sup> FIM a Emilio Madero, 9 de julio de 1911, AFIM-BN, ms. 2241; EVG a Miguel García, gobernador interino de Colima, 30 de junio de 1911; EVG a gobernador de Aguascalientes, 3 de julio de 1911; EVG a gobernador interino de Chiapas, 4 de julio; Nicolás y Ángel Guzmán a DB, Oaxaca, 7 de agosto y Fernando Mejía a DB, Oaxaca, 25 de agosto de 1911, se quejaron de la intervención de Vázquez Gómez imponiendo tanto al interino Díaz Quintas como a Juárez Maza; AGM, 10/4/73; 10/4/226; 10/4/296; 6/V2/25; 3/3/68/282;

Hidalgo, candidato surgido de los círculos laborales y él mismo obrero textil y dirigente destacado, le ganó limpiamente la elección a los otros dos contendientes, quienes tenían vínculos con el régimen porfirista y habían buscado obtener el respaldo de Madero. En su programa, Hidalgo había planteado algunas de las reformas más radicales entre esa nueva generación de mandatarios estatales: la supresión de las jefaturas políticas; la expropiación de fincas rústicas para el pueblo por causa de utilidad pública; el reavalúo de las propiedades con criterios de equidad; la supresión de la contribución personal y de las concesiones fabriles y una tasa impositiva comercial equitativa entre los negocios pequeños y grandes. Los grupos acomodados se opusieron a su elección y movilizaron sus recursos contra su candidatura.<sup>23</sup> Empero, en ambos casos, el gobierno interino y el maderismo no desconocieron los resultados ni violentaron los procesos. No obstante ello, en varias de las elecciones estatales hubo muchas denuncias y acusaciones de fraude por parte de los candidatos derrotados, por la parcialidad en la interpretación de la ley, la injerencia de las autoridades locales en el proceso, la utilización de recursos públicos para favorecer a los candidatos oficiales y obstruir a los opositores, y las prácticas de acarreo, coacción y manipulación del voto que habían imperado hasta entonces en la escasa cultura política mexicana y que fueron utilizadas nuevamente. En diversas localidades se denunciaron irregularidades como padrones incompletos o falta de ellos; llenado de urnas con listas de peones de las haciendas; presencia de personas externas enviadas por los gobernadores a llenar las boletas; connivencia de las autoridades de casilla con tales prácticas, así como por impedir el voto a ciudadanos empadronados o permitirlo a ciudadanos que no aparecían en las listas de votación y por el uso de la fuerza e intimidación para inducir el voto. Varios clubes políticos en Sonora, Baja California, Chiapas, Veracruz y Sinaloa pidieron la anulación de las elecciones en sus distritos.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Gerzayn Ugarte a DB, Tlaxcala, 7 de septiembre de 1911, donde le describía el estupor y alarma entre las clases altas y “especialmente entre los grandes agricultores” por las “prédicas socialistas” de Hidalgo, quien ofrecía repartir la tierra a los indígenas y acceder a los altos puestos del gobierno; Programa de gobierno de Antonio Hidalgo, 5 de septiembre de 1911; véase AGM, 11/V4/8; 9/S4/81; 8/V5/39; Henderson, *op. cit.*, p. 125-26.

<sup>24</sup> Vecinos de la hacienda Europa a DB, Sonora, 9 de julio de 1911; Vecinos del pozo Morgan, Sonora, a DB, 9 de julio; Vecinos de estación Carbó, Sonora, a DB, 12 de julio; Francisco Romandía a DB, Hermosillo, 25 de julio; Club maderista de obreros y artesanos a DB, Ures, 4 de septiembre de 1911; vecinos de Copainalá a DB, San Cristóbal de las Casas, 9 de septiembre; representantes de clubes políticos a DB, Orizaba, 19 de septiembre; C. Talamantes a DB, La Paz, 14 de septiembre; vecinos de Culiacán a DB, 18 de septiembre; M. Pavón a DB, Acayucan, 12 de septiembre; AGM, 24//650; 24//650; 24//650; 8/V5/92; 14/6/12; 14/5/22; 8/V5/146; 20/1/86; 15/7/1; 8/P5/19. En Coahuila, se denunció que en la elección en

Éstas habían sido prácticas consuetudinarias en todas las elecciones políticas nacionales, federales y locales, y no se iban a eliminar sólo con la voluntad de los nuevos encargados del gobierno y los jefes maderistas. Y con todo, la documentación que se conserva en los archivos no indica un fraude generalizado, sino prácticas ilícitas aisladas que posiblemente no fueron suficientes para alterar el resultado de las elecciones. Sin embargo, el verdadero problema era previo: en cierto sentido el resultado de la elección en la mayoría de los casos estaba definido de antemano en favor de los candidatos maderistas quienes gozaron la ventaja que les daba el competir como candidatos oficiales de *facto* desde el poder, usando todos los recursos legales e ilegales a su alcance. Varios de los opositores más fuertes conocieron el acoso, intimidación, presiones y el peso de la movilización de los partidarios del maderismo para bloquearlos y algunos de ellos se retiraron de la escena al darse cuenta de la imposibilidad de ganarle a los candidatos maderistas. En los pocos casos en que ocurrió, ganarle a esos candidatos requirió de una gran movilización popular y de una fuerte organización detrás de políticos opositores con arraigo.

En relación con las legislaturas estatales, fueron renovadas sólo en aquellos casos en los que correspondía previamente celebrar elecciones locales, como ocurrió en Chiapas —en donde se presentaron múltiples problemas por el conflicto entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez— y en Veracruz. El resto de los congresos locales permanecieron con el personal que había sido electo en el régimen porfiriano y, en ocasiones, ello originó disputas en las decisiones más importantes entre esos órganos y los gobernadores. En el caso del poder judicial, tanto los maderistas como el gobierno interino estuvieron de acuerdo en que debía fortalecerse su independencia y profesionalización y se aprobó una reforma legislativa que estableció el carácter vitalicio de dichos cargos y definió las causas que ameritaban su remoción.<sup>25</sup>

### *El zapatismo: resistencia de la revolución social*

El zapatismo se destacó entre todos los movimientos populares que se desarrollaron durante la insurrección maderista porque fue el único que —concluida la rebelión—, se resistió a entregar incondicionalmente las armas, exigiendo que se hiciera una reforma agraria a través

que Carranza ganó la gubernatura acarrearon a peones a votar por él en circunscripciones que no les correspondían.

<sup>25</sup> Henderson, *op. cit.*, p. 118-119.

de la cual los pueblos recuperaran las tierras y aguas de las que habían sido despojados; porque trató de establecer un gobierno local que representara las aspiraciones de los grupos rurales bajos y porque resistió a la influencia externa y del centro político nacional. Esa actitud llevó al zapatismo a establecer negociaciones con Madero y el gobierno interino en las cuales sus líderes radicalizaron su postura, rompieron con Madero y León de la Barra y lograron, a través de ese mismo proceso, adquirir una identidad y dar forma a un proyecto político propio: el Plan de Ayala.<sup>26</sup>

El zapatismo fue el ejemplo más nítido de la naturaleza predominantemente agraria de la revolución. La fuerza y el arraigo de sus reivindicaciones agrarias se explican por el conflicto de larga duración entre las haciendas azucareras y los pueblos de la zona morelense, por los desequilibrios producidos por la modernización productiva de los ingenios azucareros durante el último tercio del porfiriato —que alteraron la simbiosis funcional entre las haciendas y los pueblos y comunidades de la zona cañera—, y por el desplazamiento del sector de arrendatarios de las haciendas que tuvo lugar en los últimos años del régimen de Díaz. Posteriormente, el movimiento zapatista original de los valles centrales morelenses se extendió a las zonas periféricas, con otros actores sociales y demandas, que incluyeron reivindicaciones de autonomía estatal, municipal, y rechazo a las injerencias externas y del centro nacional.<sup>27</sup>

La ausencia de líderes maderistas durante la insurrección morelense contra Díaz y la añeja tradición de resistencia y de liderazgos populistas independientes en esa región, conocida como “El Sur” desde el siglo XIX, permitieron que, entre febrero y mayo de 1911, se aglutinara alrededor de un liderazgo nuevo, surgido de abajo, un movimiento rebelde que comenzó a dar muestras tempranas de radicalidad y violencia al tomar las principales poblaciones de la entidad morelense y de municipios contiguos de Puebla y el Estado de México. Cuando renunció Díaz, los rebeldes morelenses liderados por Zapata eran la principal fuerza insurreccional en Morelos y controlaban la mayor parte de la entidad. Paralelamente, en el vecino estado de Guerrero se había desarrollado una insurrección semejante a la de Morelos, con participación importante de la población rural y violencia popular contra las elites económicas y políticas. También ahí se destacó una dirección natural nueva, con fuertes vínculos con la población de la

<sup>26</sup> El mejor estudio sobre el zapatismo sigue siendo el de John Womack Jr, 1976; véase también Brunk, 1994, y Ávila Espinosa, 2001.

<sup>27</sup> English Martin, 1985, p. 23-28, 47-94, 163-196; Crespo, 1988, v. 1, p. 94-95, 142-144; Crespo 1996, p. 143-180, 422-475; Womack, *op. cit.*, p. 36-94; Rueda, *op. cit.*, p. 129-178.

zona. Empero, a diferencia de Morelos, en Guerrero tuvieron participación destacada las elites y notables locales, quienes tenían vínculos con el maderismo electoral. Entre esos grupos, que tenían una posición reformista moderada y de respeto a la propiedad y a las instituciones, destacó el encabezado por los hermanos Figueroa, de Huitzucó. La vecindad geográfica, los vínculos económicos y culturales en la región colindante de ambas entidades, las relaciones e intereses de esa familia, quienes tenían negocios y amistades en Jojutla, los decidieron a buscar un papel hegemónico a nivel regional. Las elites morelenses, que rechazaban el carácter plebeyo de los ataques zapatistas, se identificaron con los mejor portados rebeldes guerrerenses y promovieron que se encargaran de garantizar el orden y la seguridad. Los líderes civiles maderistas coincidieron con esa toma de partido de las elites locales y permitieron que los Figueroa ocuparan Cuernavaca y tuvieran un papel decisivo en la selección del gobernador interino. Esa elección chocó con las pretensiones de los líderes zapatistas, quienes tenían aspiraciones de controlar la reorganización del poder estatal y hacerse cargo de los cuerpos de seguridad local. Empezó a desarrollarse así una abierta y sorda disputa por la hegemonía regional entre ambos grupos que tendría un papel clave en las posiciones y actitudes que tomaron los líderes zapatistas en los meses posteriores. La exclusión de los mandos políticos y militares de que fueron objeto por el maderismo y la preferencia de éste por sus rivales de Guerrero fue la primera causa que comenzó a ahondar las diferencias entre los surianos y Madero.<sup>28</sup>

A fines de mayo de 1911 el maderismo procedió a restablecer el orden en Morelos, a nombrar un nuevo gobernador y a iniciar la desmovilización de las fuerzas insurgentes. Alfredo Robles Domínguez, comisionado para tal efecto, giró instrucciones para que se respetaran las vidas y las propiedades de las elites e hizo caso omiso de los continuos reclamos de Zapata para que le permitieran nombrar gobernador de la entidad. En acuerdo con los jefes figueroístas y los notables de la entidad, escogieron a Juan Carreón, exgerente del Banco de Morelos, para hacerse cargo de la gubernatura, con el mismo perfil de moderación y confianza que buscaban en las demás entidades. Al mismo tiempo, el maderismo nombró a Francisco Figueroa gobernador de Guerrero y a Ambrosio Figueroa jefe de armas de Morelos, con lo que ese clan se convertía en el grupo dominante en la región.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Womack, *op. cit.*, p. 86-92; Brunk, *op. cit.*, p. 39-40; Jacobs, 1990, p. 113-114; *Memorandum sobre la situación política en Morelos*, AARD, 7/37/13.

<sup>29</sup> Zapata aceptó y validó la designación. Véase Manuel Asúnsolo a ARD, Cuernavaca, 27 de mayo de 1911. Asúnsolo y Zapata a ARD, Cuernavaca, 27 de mayo; Miranda, Asúnsolo

En junio dio inicio el desarme a las fuerzas zapatistas, proceso que, aunque empezó con relativo éxito, pronto se complicó porque, de manera inesperada para Madero, Zapata exigió dos condiciones previas: que se resolviera el problema de la tierra y un cambio político que hiciera a un lado a las personas vinculadas con el régimen porfiriano para llevar al poder local a gente comprometida con las aspiraciones populares. Adicionalmente, insistieron en la permanencia de una parte de sus fuerzas dentro de los cuerpos de seguridad estatal. Zapata y Madero tuvieron varias reuniones para tratar de llegar a un acuerdo. La primera gira de Madero en el interinato fue precisamente a Morelos y Guerrero, a partir del 12 de junio de 1911; en ella pudo darse cuenta tanto de la legitimidad de los reclamos agrarios zapatistas como de la polarización que se había desarrollado en la zona y la animadversión que despertaban los zapatistas en las clases dominantes de la región. La actitud de Madero no dejó lugar a dudas: el problema de tierras no era una prioridad en esos momentos, primero tenía que hacerse el desarme y se procedería luego a estudiar el asunto agrario y a resolverlo mediante la legislación y las instituciones.<sup>30</sup>

Para el gobierno interino y para Madero no era aceptable la existencia de un grupo armado al margen de la legalidad y con reivindicaciones propias, por lo que coincidieron en la necesidad de llevar a cabo el desarme zapatista, particularmente ante las denuncias de los abusos y desmanes que comenzaron a llegar a la ciudad de México de los sectores acomodados morelenses. Alfredo y Gabriel Robles Domínguez agilizaron la desmovilización de los zapatistas. El 21 de junio se habían entregado 3 500 armas; Zapata, conservó, no obstante, 500, con las que sostuvo al núcleo principal de sus fuerzas. Empero, Zapata y sus seguidores pronto se fueron decepcionando de Madero al ver que sus reclamos para conservar una parte de sus fuerzas en pie y ocupar cargos dentro de los cuerpos de seguridad estatal eran ignorados. Más aún, el complot de Puebla para asesinar a Madero, que había dado como resultado el encarcelamiento del jefe del estado mayor de Zapata convencieron a los líderes morelenses de que si entregaban sus armas correrían peligro y no serían cumplidas sus peticiones agrarias y políticas. Y, sobre todo, influyó también en su percepción negativa y desengaño paulatino de Madero, el percatarse de que los hacendados morelenses hacían abierta campaña de desprestigio en su contra, junto con la prensa capitalina, que los satanizó

y Zapata a ARD, 29 de mayo; FIM a ARD, México, 27 de mayo; Zapata a ARD, Cuernavaca, 28 de mayo; Carreón a ARD, Cuernavaca, 31 de mayo, *AARD*, 4/7/33, 4/7/35; 4/7/56; 1/5/40; 1/5/45; 1/5/63.

<sup>30</sup> Magaña, 1985, I, p. 155-166; Brunk, *op. cit.*, p. 41-46.

y estigmatizó como bandoleros, y el ver que Madero, en lugar de confiar en ellos, se inclinaba cada vez más por los hacendados y por sus rivales, los hermanos Figueroa. Ante la negativa de los zapatistas a desarmarse incondicionalmente, se aglutinó una vasta alianza en contra de ellos por parte de las elites locales, el ejército federal, el gobierno interino y la mayoría de la prensa nacional que exigieron una solución pronta y definitiva. Esas presiones, por su parte, agudizaron las reservas y la resistencia de los zapatistas, que endurecieron también su postura. Así, durante el mes de julio de ese año el desarme avanzó muy poco y ante ello el gobierno federal decidió tener una participación más decidida para conseguir el desarme incondicional e inmediato.<sup>31</sup>

Hasta ese momento, De la Barra había confiado en que Madero podría conseguir el licenciamiento zapatista a través de la negociación. No obstante, la lentitud con que avanzaba, junto con las noticias de alarma de los hacendados y comerciantes morelenses llevaron a De la Barra y a su nuevo ministro de Gobernación, Alberto García Granados, a desconfiar de la capacidad de Madero para controlar a los zapatistas, por lo que decidieron recurrir a una medida más firme: el ingreso del ejército federal para obligar a los rebeldes surianos a licenciarse. El 9 de agosto irrumpió en la entidad una fuerte columna federal al mando de Victoriano Huerta quien, luego de vencer una débil resistencia de tropas zapatistas, ocupó Cuernavaca ese mismo día. La posición de Madero fue ambigua: si bien estuvo de acuerdo en esa decisión y la veía como una medida de presión y un recurso último si las negociaciones fallaban, se daba cuenta también que una salida violenta lo debilitaría y fortalecería al mismo tiempo a los sectores duros, al ejército y, sobre todo, a Bernardo Reyes, a quien identificaba entonces como su principal enemigo, por lo que decidió arriesgarse y tomar en sus manos la negociación con los surianos. Así, se trasladó una vez más a mediados de agosto a Morelos para conferenciar con los líderes zapatistas y evitar la ruptura.<sup>32</sup>

La irrupción del ejército federal modificó el escenario: para Zapata era una provocación que complicaría las negociaciones e interpretó la medida como una amenaza sobre sus fuerzas y una negativa expresa a solucionar sus demandas. A partir de entonces el retiro del ejército federal y el respeto a la soberanía estatal ocuparon el primer lugar en sus reclamos. En medio de esa tensión, Zapata y Madero hicieron un último intento por llegar a un acuerdo y definieron un nuevo compromiso. Madero pensaba que podían satisfacerse sus demandas sin per-

<sup>31</sup> Ávila Espinosa, *op. cit.*, p. 140-145.

<sup>32</sup> *Ibidem*, p. 146-153.

der la autoridad estatal ni el control político de la entidad, si se ponía a un gobernador maderista aceptado por ellos y se comenzaba a estudiar la solución del problema agrario. Los zapatistas, a su vez, pidieron la salida del ejército; que las autoridades estatales respondieran a las aspiraciones populares; que se conservara una parte de sus fuerzas en los cuerpos estatales y que se hiciera una reforma agraria. Así, Madero y Zapata decidieron que el gobernador de Morelos fuera el maderista norteño Eduardo Hay, que el jefe de armas de la entidad fuera Raúl Madero y que el ejército se retirara una vez que concluyera el desarme. Un sector de las tropas de Zapata se incorporaría a las milicias estatales; Zapata tendría garantías para retirarse a la vida privada y la legislatura estatal comenzaría a estudiar la solución el problema agrario. Con estas bases se reanudó el desarme el 17 de agosto de 1911 en Cuautla.<sup>33</sup>

Sin embargo, De la Barra y el ejército federal tenían otra percepción y adoptaron una táctica distinta para conseguir el objetivo de desmovilizar a los rebeldes: la intervención militar. El presidente interino, los altos mandos del ejército y una parte del gabinete consideraban al desarme una farsa, que Zapata los engañaba y ganaba tiempo y que la mediación de Madero había sido estéril. Querían el desarme incondicional y terminar con un movimiento insubordinado que seguía sembrando alarma entre la población morelense acomodada y que era rechazado con furia creciente por la mayoría de la prensa capitalina. Así pues, estando en curso el desarme, a pesar de los llamados de Madero de que no interviniera y permaneciera en Cuernavaca, el 19 de agosto la columna de Huerta inició movimientos ofensivos sobre Yautepec y se rompieron las hostilidades en las afueras de esa población. Esa maniobra, decidida por León de la Barra y Huerta en contra de la opinión de Madero, tuvo el efecto de suspender el desarme, poner en alerta a los zapatistas y dejar a Madero en una situación muy comprometida ante éstos, al interpretar que los había engañado o que no tenía ningún control sobre el ejército y el gobierno federales.<sup>34</sup>

Madero consiguió una última oportunidad para buscar un arreglo. El consejo de ministros, el 20 de agosto, le concedió 48 horas de tregua para lograr una solución y ordenaron a Huerta que permane-

<sup>33</sup> *Nueva Era*, 16, 17 y 19 de agosto de 1911; FIM a DB, 11 y 13 de agosto de 1911; Huerta a DB, 15 de agosto; DB a Huerta, 15 de agosto; DB a FIM, 15 de agosto; FIM a Zapata, 16 de agosto; Huerta a DB, 16 de agosto; Zapata a DB, 17 de agosto; FIM a DB, 18 de agosto; AGM, 15/1/27, 15/1/63-67, 17/8/14; 14/3/3-4; 16/1/24; 14/4/21; 14/3/43; 14/3/52, 54, 59; 14/4/23; 17/8/17. Zapata a FIM, 17 de agosto, Archivo de Jenaro Amézcua (A/A), VIII-2/1/34.

<sup>34</sup> FIM a DB, 19, 20, 21 de agosto de 1911; DB a FIM, 19 de agosto; Huerta a DB, Yautepec, 20, 22, 23 de agosto; AGM, 17/8/26-27; 16/1/26; 17/8/34; 17/8/28; 16/1/2; 17/8-9/18; 17/8/49; *Diario del Hogar*, 20 y 21 de agosto de 1911; *Nueva Era*, 22 y 24 de agosto de 1911.

ciera en las afueras de Yautepec. Madero y Zapata ratificaron su compromiso previo, Madero pidió a De la Barra que regresara el ejército a Cuernavaca, sin conseguirlo, y se reanudó parcialmente el desarme. No obstante, por segunda ocasión, Huerta y De la Barra, quienes eran conscientes de que tenían el control de la situación, mantuvieron la iniciativa y, antes de que concluyera el plazo, decidieron un movimiento ofensivo envolvente: Huerta tomó Yautepec, Joncatepec y avanzó sobre Cuautla; las fuerzas de Ambrosio Figueroa se trasladaron desde Jojutla hacia el noreste de la entidad, cerrando la pinza sobre los surianos. Fue la ruptura definitiva. Las principales plazas de Morelos fueron ocupadas por el ejército federal, que militarizó esa entidad y las zonas colindantes de los estados vecinos; Zapata tuvo que huir y refugiarse en las montañas de Puebla, en condiciones de extrema debilidad. Madero, fracasada su estrategia de negociación y desacreditado, tuvo que regresar a México luego de quedar ante los ojos de los zapatistas como un traidor.<sup>35</sup> Ese fracaso lo distanció definitivamente del presidente interino y la ruptura con el zapatismo fue, quizá, el acontecimiento más significativo políticamente del interinato, que deslindó con claridad los campos entre las principales clases, actores y proyectos: por un lado, León de la Barra, el ejército y los grupos conservadores partidarios de la mano dura que se estaban organizando para actuar contra la revolución; por el otro el zapatismo, que representaba a los sectores populares radicalizados que exigían la realización de reformas y habían llevado su postura intransigente al extremo de negarse a abandonar las armas y formular un proyecto alternativo al maderismo, ante la incapacidad de éste de aceptar sus planteamientos; en medio, Madero, quien intentó infructuosamente establecer una mediación entre ambos extremos y evidenció las limitaciones de ese intento.

El fracaso de las negociaciones con los zapatistas tuvo cuatro efectos inmediatos: radicalizó y dotó de una identidad propia al grupo zapatista que, al romper con Madero, se convirtió en el adalid de la causa agraria. Influyó también en la ruptura entre Madero y De la Barra quienes, a pesar de buscar el mismo objetivo, siguieron diferentes tácticas y en el proceso agudizaron sus diferencias, perdieron la confianza recíproca que habían tenido hasta entonces y enfriaron sus relaciones y colaboración. De la Barra se impuso temporalmente a Madero, con lo que se fortaleció la presencia del gobierno interino y del ejército —para las elites los únicos que podían garantizar la paz y la tranquilidad—.

<sup>35</sup> Huerta a DB, 23, 28, 29 de agosto de 1911; DB a FIM, 22 de agosto; Srio. de Guerra a Huerta, 29 de agosto; DB a Huerta, 31 de agosto; Zapata a DB, 31 de agosto; AGM, 17/8/49; 16/1/9; 16/2/24; 17/8/44; 16/11/24; 14/2/2; 15/5/4. FIM a DB, 25 de agosto, A/A, VIII-2/1/58.

La autoridad y el prestigio de Madero continuaron disminuyendo y se evidenció su primer fracaso público. Finalmente, la unidad y la cohesión dentro del maderismo se debilitaron también: Madero perdió autoridad y control sobre una parte de sus seguidores, particularmente los que estaban a la izquierda de él, ante los cuales no se justificaba la represión que se había desatado contra los zapatistas, a los que consideraban representantes de una causa legítima que la revolución debía atender. Adicionalmente, se produjo también una crisis ministerial en la que tuvieron que renunciar los ministros de Gobernación, Alberto García Granados, el de Guerra, José González Salas, y el de Instrucción Pública, Francisco Vázquez Gómez, lo que debilitó todavía más la capacidad y la eficacia del ya de por sí efímero gobierno provisional; Huerta mismo fue relevado de la jefatura de la campaña federal por el general Casso López. En suma, salvo el ejército y los partidarios de la línea dura contra la revolución, todos los demás actores, revolucionarios y moderados, salieron perdiendo con lo ocurrido.<sup>36</sup>

En septiembre y octubre de 1911 los zapatistas se refugiaron y reorganizaron en la zona poblana colindante con Morelos. Sus fuerzas, muy disminuidas por el desarme y por la persecución del ejército federal, sin embargo, lograron resistir y volvieron a crecer, al encontrar el apoyo de la población. La irrupción del ejército federal, en lugar de acabar con la revuelta, la extendió. El maderismo nombró a Ambrosio Figueroa gobernador de Morelos el 27 de septiembre de ese año, quien se dedicó primordialmente a combatir a los zapatistas, con una muy mala coordinación con el ejército federal. Los guerrilleros surianos ampliaron su radio de acción a Puebla, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México y pudieron regresar a su entidad con una fuerza de 1 500 hombres. Sus demandas se radicalizaron: exigieron la salida de todos los gobernadores, la suspensión de las elecciones federales, la supresión de las jefaturas políticas, la salida del ejército federal de las cinco entidades a las que habían extendido su influencia, la libertad de los presos políticos y la restitución a los pueblos de las tierras, montes y aguas de que habían sido despojados. El gobierno interino y Madero rechazaron esas exigencias y continuaron la persecución y aniquilamiento de los guerrilleros surianos.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Ávila Espinosa, *op. cit.*, p. 170-180.

<sup>37</sup> Casso López a DB, 1º de septiembre de 1911; DB a Huerta, 19 de septiembre; Raúl Cañete a DB, 12 de septiembre; DB a F. Figueroa, 12 de septiembre; Huerta a DB, 13 y 14 de septiembre; Heliodoro Díaz a DB, 14, 15 y 19 de septiembre; A. Figueroa a DB, 17, 18, 19, 20, 26, 28 de septiembre, 5, 8, 16, 17, 20 y 29 de octubre de 1911; AGM, 15/5/14; 15/5/19; 13/2/22; 13/2/26; 12/1/28; 13/2/37; 13/2/38, 63, 88-89; 20/1/60, 68, 85, 135; 21/2/23-24; 21/4/11; 21/4/54-55; 19/6/24, 38, 39, 113-114.

El fracaso de tales intentos evidenció que lo que estaba detrás de la resistencia zapatista era una rebelión agraria en gestación, por parte de los grupos rurales marginados del centro-sur del país, en donde a esa problemática se sumó el descontento contra autoridades locales, caciques, hacendados y comerciantes y el rechazo a la depredación efectuada por el ejército federal. El zapatismo logró lo que no habían podido hacer los otros movimientos populares regionales que no se contentaron solamente con el cambio político: la maduración endógena de una identidad y de un programa que hizo conscientes sus intereses y sus diferencias con el maderismo, que ordenó y generalizó sus demandas y que les dio una expresión política mediante la formulación del Plan de Ayala, síntesis y superación de su experiencia previa. La resistencia zapatista al desarme y su enfrentamiento contra el gobierno interino, el ejército y Madero los convirtió en uno de los principales canales a través de los cuales se pudieron expresar los reclamos y aspiraciones de sectores que no estaban satisfechos con los límites que las elites le habían puesto a las reformas sociales durante el gobierno provisional. Se convirtió así en el principal problema político del interinato y en uno de los factores que debilitó la cohesión del proyecto maderista. Al concluir su mandato León de la Barra reconoció en el problema de Morelos uno de los principales fracasos de su gestión. En su informe final reconoció que los esfuerzos por someter a los zapatistas habían sido infructuosos, debido a la dispersión y movilidad de las bandas guerrilleras y a su conocimiento del terreno, pero sobre todo porque Zapata “se había hecho popular entre las clases incultas del estado por ofrecimientos de repartición de tierras”.<sup>38</sup> El movimiento zapatista trascendería el interinato y se convertiría también en uno de los principales problemas políticos del gobierno constitucional de Madero.

<sup>38</sup> Magaña, *op. cit.*, II, p. 28-48; Informe final de León de la Barra, *El País*, 5 de noviembre de 1911.